



PROPOSTA D'ACORD DE PLE

Regidoria: Urbanisme	Data sessió: 2 d'abril de 2019
Assumpte: Conveni urbanístic de gestió per a l'execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 177/2007, de 23 de febrer, sobre el projecte de reparcel·lació de la urbanització Las Colinas	
Núm. expedient: 1376-1479/2018	

Antecedents

1. La secció tercera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar la sentència número 177/2007, de 23 de febrer, en el recurs interposat pel senyor Joaquim Salvà i Garró contra el Decret d'alcaldia de l'Ajuntament d'Olivella de 8 de maig de 2003 sobre aprovació del projecte de reparcel·lació de la urbanització Las Colinas.

Es transcriu a continuació el text de la sentència publicat en el centre de documentació judicial del Consell General del Poder Judicial:

«Roj: STSJ CAT 5525/2007 - ECLI: ES:TSJCAT:2007:5525
Id Cendoj: 08019330032007100200
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Barcelona
Sección: 3
Fecha: 23/02/2007
Nº de Recurso: 59/2004
Nº de Resolución: 177/2007
Procedimiento: Recurso ordinario (Ley 1998)
Ponente: ANA RUBIRA MORENO
Tipo de Resolución: Sentencia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA

Recurso nº 59/2004

SENTENCIA Nº 177/2007

ILMOS. SRES.
MAGISTRADOS:
DON JOSE JUANOLA SOLER
DON MANUEL TABOAS BENTANACHS
DOÑA ANA RUBIRA MORENO

En la ciudad de Barcelona, a veintitrés de febrero dos mil siete.

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION TERCERA), ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo número 59/2004, interpuesto por DON Tomás, representado por la Procuradora DAÑA MARIA JOSE BLANCHAR GARCIA, y dirigido por el mismo, contra el AYUNTAMIENTO DE OLIVELLA, representado por el Procurador DON JORGE ENRIQUE RIBAS FERRE y dirigido por el Letrado DON ESTEVE RADRESA MIRACLE. Es Ponente Doña ANA RUBIRA MORENO, Magistrada de esta Sala, quien expresa el parecer de la misma.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO.- La representación de la parte actora, por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala, interpuso recurso contencioso administrativo contra la desestimación por acto presunto del recurso de reposición formulado contra el decreto dictado el 8 de mayo de 2003 por el Alcalde de Olivella, de aprobación del Proyecto de reparcelación de la Urbanización Las Colinas y contra el Proyecto de Urbanización Las Colinas.

SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto en la Ley reguladora de esta Jurisdicción. La actora dedujo demanda en la que, tras relacionar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicables, terminaba solicitando que se estime el recurso y estimen las siguientes pretensiones: a).- Se estime íntegramente el recurso, declarando que no se ajusta a derecho el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento demandado relativo a la aprobación definitiva del Proyecto de reparcelación y el Proyecto de urbanización de la Unidad de actuación 4 "Las Colinas"; b).- Que sea declarado nulo y sin efecto la aprobación definitiva del Proyecto de reparcelación y el Proyecto de Urbanización de la citada Unidad de actuación; c).- Que sea declarado a favor del propietario de la parcela número 0 de la manzana B, del polígono quinto con referencia catastral núm. NUM000 , su derecho a la edificabilidad y el derecho al aprovechamiento urbanístico previstos en el sector y la corolaria obligación de pago de cuotas urbanísticas.

TERCERO.- La Administración demandada en la contestación a la demanda solicitó la desestimación del recurso.

CUARTO.- Se prosiguió el trámite correspondiente y, practicadas las pruebas que propuestas fueron declaradas pertinentes, con el resultado que obra en las actuaciones, se pasó al trámite de conclusiones sucintas, señalándose para votación y fallo el 21 de febrero 2007.

QUINTO.- En la sustanciación de este de este pleito se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Como se ha adelantado en los antecedentes de hecho, en el escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se indicaba que el mismo se dirigía contra la desestimación por acto presunto del recurso de reposición formulado contra el decreto dictado el 8 de mayo de 2003 por el Alcalde de Olivella, de aprobación del Proyecto de reparcelación de la Urbanización Las Colinas y contra el Proyecto de Urbanización Las Colinas.

Con el escrito de interposición del recurso se aporta copia del recurso de reposición que se dice desestimado por silencio, que se dirige contra el decreto de 8 de mayo de 2003, en cuyo súplico se pide: "Que tingui per presetat escrit, per interposat en temps i forma recurs de reposició contra el Decret d'Alcaldia número 43 de data 8 de maig de 2003, ... i si s'escau contra la aprovació definitiva del Projecte de reparcelació de la Urbanització Las Colinas". Al mismo sigue otro escrito en el que se dice que las alegaciones presentadas son tanto respecto del Proyecto de reparcelación como del Proyecto de urbanización aprobado por acuerdo de 5 de noviembre de 2002, solicitando certificación acreditativa del silencio negativo respecto del recurso de reposición formulado contra el decreto de 8 de mayo de 2003.

El decreto de 8 de mayo de 2003 acuerda: "Primer.- Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació número 4 Las Carolinas, amb la resposta de les al·legacions presentades pels interessats segons el document que consta a l'expedient administratiu corresponent, i amb introducció de les modificacions no substancials



derivades de la resolució de les alegacions presentades, tot això segons el projecte de reparcel·lació definitiu presentat per l'empresa Gestio d'Entitats Urbanístiques, S.L".

Como es de ver, pese a que en el escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se dice que el mismo se dirige, además de contra el Proyecto de reparcelación, contra el Proyecto de urbanización de la Urbanización Las Colinas, en el acto recurrido de 8 de mayo de 2003 no se contiene declaración alguna sobre el Proyecto de urbanización. No obstante, faltando pronunciamiento administrativo expreso sobre las alegaciones que se dice dirigir también contra el Proyecto de urbanización, se ha de estimar que las mismas han sido desestimadas por un acto presunto, objeto de este recurso.

SEGUNDO.- En defensa de su pretensión anulatoria la parte actora alega: que el hecho de delimitar el total ámbito de actuación directamente con la carretera BV 2415, sin guardar los parámetros de uso y edificabilidad que permite la legislación general y especial sobre la materia (carreteras), es una suerte de inclusión de una parte de un sistema general dentro del polígono, que no puede desconocerse por el Proyecto de reparcelación; la delimitación de las unidades de actuación es una actuación reglada; en aplicación del artículo 182.2 del TRLUC, el sistema de cooperación exige la reparcelación de los terrenos comprendidos en el polígono o unidad de actuación y la falta de edificabilidad de las parcelas colindantes con la carretera obsta la justa distribución de beneficios y cargas; la propietaria de la parcela resultante 0 de la isla B, del polígono pagó una cantidad a cuenta de los gastos de urbanización; incumplimiento de los parámetros del artículo 120 del TRLUC, defendiendo que las servidumbres de las parcelas colindantes con la carretera afectan al total ámbito de actuación y así el plano 5.A (folio 5321) de fincas aportadas no grafía la carretera, y el apartado 3.2.5 de la Memoria dispone la indemnización de las servidumbres incompatibles con el planeamiento, regulando supuestos de doble inmatriculación y de zonas verdes; las fincas resultantes han de tener aprovechamiento; la finca es urbana.

A las pretensiones de la actora se opone la Administración demandada alegando: la limitación a la posibilidad de edificar en la finca del recurrente derivada de la legislación sectorial de carreteras, no es una carga del planeamiento, por lo que no puede ser asumida en el Proyecto de reparcelación: la carretera preexistía a las Normas Subsidiarias, art. 133, y por ello en el convenio urbanístico que menciona la actora no se cita como cesión, y en cuanto a las cuotas urbanísticas se informó al recurrente sobre su devolución, sin que la clasificación del suelo como urbano tenga trascendencia alguna; enriquecimiento injusto del recurrente ya que en el momento de la compraventa de la finca ya se conocía la limitación de las posibilidades edificatorias de la misma.

TERCERO.- En el documento II de la Memoria del Proyecto de reparcelación se recogen los criterios de valoración. En su apartado 1.1.3 "Valoració dels terrenys aportats" se hace mención de las fincas colindantes a la carretera con la indicación de que quedan afectadas desde el momento en el que se construyó dicha infraestructura por la correspondiente servidumbre y se añade: "D'acord amb les Normes Subsidiàries, art. 133 <<Aquelles parts de sòl afectades per servituds de les línies elèctriques d'alta tensió i de carreteres seran inedificables, matitzant en relació a les darreres que, les parcel·las colindants amb les carreteres BV-2111 i BV-2112 que, per l' estructura viària interna de la urbanització només tenen accés directe des d'aquelles restaran, en tot cas, lliure d'edificació ja que, a més de la servitud corresponent, resulten afectades per la impossibilitat legal funcional de que es pugui realitzar un accés individualitzat directe a cadascuna d'elles>>".

Considerant alló previst en el planejament i donada la seva inedificabilitat i per tant la seva manca de aprofitament, les parcel·les relacionades són adjudicades cadascuna



OLIVELLA

AJUNTAMENT

d'elles al seu titular original, que manté el dret respectiu, però no se'ls repercuteix cap tipus de cost d'urbanització. Sí determina el projecte que en el cas que més endavant es realitzi alguna agrupació amb parcel·les colindants posteriors i per tant, s'incrementi el sostre màxim edificable, a l'esmentada superfície se li repercutiran la part proporcional de les despeses d'urbanització; els ingressos obtinguts disminuiran les despeses globals de tot el sector o en el cas que en el moment de la venda d'aquest terrenys ja s'hagi produït la liquidació del projecte reparcel·ladori, els ingressos obtinguts es repercutiran forçossament en benefici de l'urbanització". La falta de impugnación indirecta obsta cualquier pronunciamiento sobre las Normas Subsidiarias, de cuyo contenido, según se deduce, parte el Proyecto de reparcelación.

CUARTO.- La Ley 7/1993, de 30 de septiembre, de Regulación de Carreteras, en el Capítulo I el Título IV contiene la regulación del régimen de uso y protección del dominio público viario y zonas de protección, distinguiendo la zona de dominio público, la zona de servidumbre y la zona de afectación.

Las limitaciones al derecho de propiedad establecidas en beneficio de la seguridad del tráfico y de la carretera deben ser respetadas y ser de obligatoria observancia cualquiera que sea la forma en que se han realizado (STS de 5 de junio de 1998), sin que el establecimiento de esas limitaciones supongan contradecir el reconocimiento del derecho de propiedad que proclama el artículo 33 de la CE , pues en el número 2 del citado precepto se determina de modo claro que la función social de este derecho delimitará su contenido de acuerdo con las leyes (STS de 2 de febrero de 1982). Impuestas las afecciones derivadas de la normativa sectorial, las mismas deben ser respetadas y asumidas por la ordenación urbanística.

El artículo 147 del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio , por el que se aprueba el Texto Refundido de la legislación vigente en materia de urbanismo (TRLUC), dispone que se entenderá por reparcelación la agrupación de fincas comprendidas en el polígono o unidad de actuación para su nueva adjudicación de las parcelas resultantes a los interesados, en proporción a sus respectivos derechos. La reparcelación tiene por objeto distribuir justamente los beneficios y cargas de la ordenación urbanística, regularizar la configuración de las fincas y situar su aprovechamiento en zonas aptas para la edificación con arreglo al Plan.

Dentro de esas cargas urbanísticas a distribuir se encuentran las derivadas de la legislación sectorial, antes referidas.

Como se recoge en la sentencia número 51/2006 dictada por esta Sala y Sección de 26 de enero de 2006 en el recurso seguido con el número 857/2002 , "no se acepta que un proyecto equidistributivo como el de autos, vulnerando incuestionablemente lo dispuesto en el artículo 147 del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio , por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en Cataluña en materia de Urbanismo , y demás preceptos concordantes, pueda actuarse en todas sus complejas y sustanciales operaciones reparcelatorias sólo en unos terrenos, que no en otros, como si de una fragmentación total o parcial del ámbito territorial se tratase haciéndolo desaparecer a determinados efectos -así, para excluir o para no sujetar determinados terrenos a las preceptivas aportaciones y adjudicaciones de fincas o en la imposición de las correspondientes cargas urbanísticas-. Ineludiblemente todos los terrenos del ámbito reparcelatorio deben resultar sujetos y afectos a esas complejas operaciones y ello sin perjuicio, como se ha expuesto, de la operatividad posible de coeficientes correctores debidamente fundados con la finalidad puesta en la debida apreciación y ponderación de las circunstancias concurrentes".



QUINTO.- El apartado 3.2 del Documento II, "Criteris de valoració", de la Memoria, antes citado, recoge los criterios específicos de valoración de indemnizaciones. Su punto 5, referido a servidumbre y cargas dispone:

"Quan la servitud o la càrrega sigui incompatible amb el planejament i la seva extinció provoqui un detriment en la propietat o drets, demostrat i justificat, es valorarà la indemnizació en metàl·lic d'acord amb allò preceptuat en la LS 98 i la LEF, en particular art. 42 LEF (i art. 41.1. REF), que remet a la legislació fiscal".

Contrariamente a lo defendido por la parte actora, el citado precepto no resulta de aplicación al caso de autos, ya que la ejecución del planeamiento mediante un instrumento de gestión no determina la extinción de servidumbres y cargas con origen en la legislación sectorial de carreteras, que haga necesaria su indemnización, pues se mantienen.

De igual forma, el hecho de que a la anterior propietaria de la finca adjudicada al recurrente hubiera satisfecho como adelanto de los gastos de urbanización alguna cantidad, no haría nacer derecho alguno, máxime cuando con los documentos aportados la demanda se constata que está prevista la deducción de la cantidad satisfecha como cuota previa, como tampoco tiene relevancia la clasificación del suelo como urbano y el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles. Pero, en todo caso la reparcelación habrá de comportar no sólo la justa distribución de los beneficios que genera, sino también de las cargas.

El apartado 1.2 del Documento II, "Criteris d'adjudicació", recoge entre los criterios específicos los aplicables a los supuestos de doble inmatriculación de una misma finca y de parcelas sobre zonas verdes. Con la prueba testifical propuesta por la actora se acredita la aplicación de esos criterios a los supuestos previstos, pero sin extensión a otros casos totalmente distintos como son los referidos a fincas colindantes a carretera.

Procede, pues, estimar parcialmente el recurso para declarar la disconformidad a derecho del acto recurrido en cuanto aprueba un Proyecto de reparcelación sin atender al principio de justa distribución de beneficios y cargas dispuesto en el artículo 147 del TRLUC, no así del Proyecto de urbanización, respecto del cual no se contiene en la demanda alegación alguna determinante de su disconformidad a derecho.

SEXTO. - No ha lugar a efectuar expreso pronunciamiento sobre las costas causadas, al no apreciarse temeridad ni mala fe en las partes, conforme dispone el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Tercera, ha decidido:

Primero. Estimar parcialmente el recurso interpuesto por Don Tomás contra la desestimación por acto presunto del recurso de reposición formulado contra el decreto dictado el 8 de mayo de 2003 por el Alcalde de Olivella, que se anula, desestimando las demás pretensiones.

Segundo. No efectuar pronunciamiento impositivo de las costas procesales devengadas en la substanciación del presente recurso.



Así por esta nuestra sentencia, que será notificada a las partes con expresión de los recursos que, en su caso, procedan contra ella, llevándose testimonio de la misma a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos».

2. El 6 de febrer de 2009, l'alcalde de l'Ajuntament d'Olivella formalitza un conveni urbanístic amb el senyor Joaquím Salvà i Garró, per a l'execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 177/2007, de 23 de febrer, sobre el projecte de reparcel·lació de la urbanització Las Colinas.

Aquest conveni no consta als llibres d'actes del Ple municipal que hagi estat objecte d'aprovació.

3. El 13 de gener de 2017 es registra a l'Ajuntament (registre d'entrada núm. 162-1/2017) un escrit del senyor Joaquím Salvà i Garró en què exposa que el 6 de febrer de 2009 va formalitzar un conveni urbanístic avantdit, però que no ha estat executat. Per això en demana la resolució contractual.

4. El Decret d'alcaldia núm 98/2017, de 6 d'abril, acorda suspendre el termini per a resoldre la reclamació avantdita fins a la finalització de l'auditoria urbanística encarregada per l'Ajuntament.

5. El 24 de juliol de 2017, el senyor Joaquím Salvà i Garró interposa un recurs contenciós-administratiu contra el Decret d'alcaldia núm 98/2017, de 6 d'abril.

6. El 28 de juliol de 2017, el secretari judicial del jutjat contenciós-administratiu núm. 10 de Barcelona dicta un decret d'admissió a tràmit del recurs esmentat (procediment número 278/2017-V).

7. El Decret d'alcaldia número 273/2017, de 4 d'octubre, va resoldre la compareixença de l'Ajuntament en el recurs susdit.

8. El Decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 12863/2017, de 14 de desembre, atorga a l'Ajuntament l'assistència.

9. L'Ajuntament emplaça el recurs judicial al President de la Junta de compensació de la urbanització las Colinas, en liquidació. L'emplaçament es va notificar personalment pels agents municipals al President el dia 15 de gener de 2018.

10. El 2 de març de 2018 el jutjat contenciós-administratiu núm. 10 de Barcelona dicta la interlocutòria número 33/2018, en què declara caducat el recurs interposat.

11. El 13 de novembre de 2018 es registra a l'Ajuntament (registre d'entrada núm. E/4461-2018) un escrit del senyor Joaquím Salvà i Garró en què exposa que el 6 de febrer de 2009 va formalitzar un conveni urbanístic avantdit, però que no ha estat aprovat pel Ple municipal. Per això en demana la seva aprovació, o en cas que no sigui aprovat s'apliqui la clàusula quarta del conveni susdit.

Fonaments de dret

1. Auditoria urbanística

En la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament tinguda el 27 de març de 2018, s'ha donat compte del resultat de l'auditoria urbanística, emès per Rousaud Costas Duran SLP el mes de desembre de 2017.



En compliment del que determina l'article 14.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya i l'article 14.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, el resultat de l'auditoria s'ha posat en coneixement general per mitjà d'un anunci publicat en el «Butlletí Oficial de la Província de Barcelona» de data 27-4-2018.

A l'apartat de l'expedient de gestió urbanística de la urbanització Las Colinas, a les pàgines 163 a 165, es tracta específicament la qüestió que ens ocupa en els termes següents:

«4. ANÀLISI D'ADEQUACIÓ URBANÍSTICA

El TSJC va dictar Sentència en data 23/02/2007, que és ferma, anul·lant l'acord municipal de 08/05/2003 d'aprovació definitiva del PR per infracció del principi de justa distribució de beneficis i càrregues atès que no es distribueix entre la comunitat reparcel·latòria la càrrega que per a les finques resultant que confronten amb les carreteres BV-2111 i BV-2212 suposa la seva afecció a les servituds de la legislació de carreteres i que comporta que no es puguin edificar. Per tant, és evident que en aquest extrem el PR no és conforme a Dret.

El compliment de la Sentència no ha de passar necessàriament per la tramitació d'un nou PR, a no ser que el TSJC consideri el contrari, i aquest compliment de la Sentència podria consistir en preveure via modificació del PR, via liquidació definitiva de la reparcel·lació (cal tenir present que aquesta liquidació definitiva requereix que la urbanització estigui acabada i recepcionada per l'Ajuntament) o via conveni d'execució de la Sentència la corresponent indemnització substitutòria d'edificabilitat a l'actora (cal tenir present que els pronunciaments de la Sentència també afecten a aquells propietaris que es trobin en la mateixa situació encara que no hagin interposat recurs contenciós-administratiu) i amb el benentès que la potestat per declarar que la Sentència s'ha executat correspon al TSJC.

L'Alcaldia i la part actora van formalitzar en data 06/02/2009 Conveni d'execució de Sentència, en virtut del qual i en el marc de redacció del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) l'Ajuntament es compromet a aprovar alguna de les alternatives següents:

- a) Que la parcel·la de la recurrent no estigui afectada per limitacions de la legislació de carreteres.
- b) Fer una proposta urbanística que permeti la justa distribució de beneficis i càrregues en relació a la parcel·la del recurrent.

En el referit Conveni d'execució de Sentència, l'Ajuntament es compromet a permutar una parcel·la del municipi per la finca del recurrent, d'anàlogues característiques i que permeti la justa distribució de beneficis i càrregues, en el cas que aquelles alternatives no siguin aprovades definitivament en el marc de POUM o bé no siguin possibles o bé si transcorren 2 anys des de la data del Conveni.

En el mateix Conveni es preveu que l'actora tindrà per executada la Sentència una vegada es materialitzin eficaçment alguna de les dues alternatives esmentades, que qualsevol part queda facultada per presentar al TSJC el Conveni als efectes de considerar suspensivament executada la Sentència (en data 10/02/2009 es va presentar al TSJC el Conveni) i que una vegada materialitzada la solució que correspongui es podrà presentar al TSJC l'execució definitiva de la Sentència. L'eficàcia del Conveni queda condicionada a la seva aprovació definitiva pel Ple de l'Ajuntament, tal com preveu en el mateix, i no consta que hagi estat aprovat, per la qual cosa no és eficaç.



En qualsevol cas, cal tenir present que l'execució de la Sentència via convencional requereix que tal opció sigui validada pel TSJC i això encara no ha succeït atès que el Conveni no ha estat aprovat pel Ple de l'Ajuntament (no és eficaç), no s'han materialitzat les alternatives proposades en el Conveni ni tampoc s'ha formalitzat la permuta amb caràcter subsidiari. A més a més, no procedeix l'alternativa que proposa el Conveni consistent en què la parcel·la de la recurrent no estigui afectada per limitacions de la legislació de carreteres (l'Ajuntament no té competències per modificar aquesta legislació) ni tampoc la permuta subsidiària que proposa el repetit Conveni atès que la càrrega que comporta la inedificabilitat de la finca del recurrent per les limitacions de la legislació de carreteres ha de ser assumida per la comunitat reparcel·latòria (els propietaris adjudicatari de finques amb aprofitament urbanístic) i no pas per l'Ajuntament, per la qual cosa el Conveni es considera que no s'ajusta a l'ordenament urbanístic i que no pot ser ratificat pel Plenari de la Corporació municipal.

D'altra banda, d'acord amb la Disposició Transitòria Vuitena de la LUC, el PR, en els seus aspectes formals i substantius, es regeix per la LUC atès que es va aprovar inicialment després de la seva entrada en vigor. Per tant, les finques incloses en la Unitat d'Actuació nº 4 Las Colinas tenen la condició de sòl urbà no consolidat (art. 31 de la LUC), però no hi ha l'obligació de cessió gratuïta del 10% de l'aprofitament, doncs en l'article 43.1 de la LUC només es preveu aquesta obligació de cessió del 10% de l'aprofitament sobre els nous usos o sobre l'edificabilitat addicional i no és el cas. Per altra part, en el PR es recullen les cessions dels sistemes urbanístics previstos en el planejament a favor de l'Ajuntament.

[...]

5. CONCLUSIONS

5.2 AL CONTINGUT

[...]

En relació al PR

El Conveni d'execució de la Sentència de 6/02/2009 entre l'Alcaldia i la part recurrent no és eficaç per no haver estat aprovat pel Ple de l'Ajuntament.

El Conveni d'execució de la Sentència de 6/02/2009 no es considera ajustat a Dret en els extrems que preveu com a una de les dues alternatives que la parcel·la de la recurrent no estigui afectada per limitacions de la legislació de carreteres (l'Ajuntament no té competències per modificar aquesta legislació) i en l'extrem que preveu amb caràcter subsidiari la formalització d'una permuta de finques entre l'Ajuntament i la actora (la càrrega que comporta la inedificabilitat de la finca de la recurrent ha de ser assumida per la comunitat reparcel·latòria i no per l'Ajuntament).

6. RECOMANACIONS

En relació al PR

Es recomana reformular de mutu acord amb l'actora el Conveni d'execució de la Sentència de 23/02/2009, eliminant l'alternativa que parcel·la de la recurrent no estigui afectada per limitacions de la legislació de carreteres, així com la previsió subsidiària de permuta i canviar-la per una indemnització substitutòria d'edificabilitat, fent constar que la mateixa és a càrrec de la comunitat reparcel·latòria, aprovar el nou Conveni pel Ple



de l'Ajuntament i sol·licitar al TSJC l'homologació als efectes de tenir per executada la Sentència».

2. El dia 1 de març de 2019 l'arquitecte municipal emet l'informe que es transcriu a continuació:

«Informe dels Serveis Tècnics Municipals

Interessat:

En Joaquim Salvà Garró

Assumpte:

Sol·licitud d'aprovació per Ple d'un conveni urbanístic
Expedient 1376-1479/2018

Situació:

"Las Colinas". – Parc 0 de la illa B, del Polígon 5è. –
Ref Catastral núm. 7443617CF9774S-0001BB

En Joaquim Salvà i Garró, mitjançant instància de 13 de novembre de 2018 manifesta;

- ser propietari de la "porció de TERRENY (...) constituïda per la parcel·la 0 de la illa B, del polígon cinquè del plànol parcel·lari (...) de "Las Colinas" (...) Té una superfície de vuit-cents quaranta-vuit metres quadrats. Afronta.- Pel seu front, Nord-est, en línia de 34 metres amb la carretera de Sant Pere de Ribes a la de Barcelona a Tarragona (...)". REFERENCIA CADASTRAL 7443617CF9774S-0001/BB.
- Que el 6 de febrer de 2009 va signar (amb representats de l'Ajuntament), un conveni urbanístic per donar compliment a la sentència "177/2007 dictada en data 23 de febrero de 2007".
- Que; "Manca l'aprovació per part del Ple Municipal del conveni de constant referència i llur compliment, i per tant en el mes immediat Ple Municipal del mes de Novembre de 2018 s'ha de portar a Ple, i en el cas que no es porti o que no s'aprovi, caldrà notificar totes les circumstàncies concurrents (...)".

INFORMO;

Primer; l'auditoria urbanística, redactada per Rousaud Costas Duran S.L.P conclou; respecte el conveni urbanístic, signat l'any 2009, entre l'Ajuntament i el Sr. Salvà, que el mateix no pot esser portat a aprovació del Ple, "(...) el Conveni es considera que no s'ajusta a l'ordenament urbanístic i que no pot ser ratificat pel Plenari de la Corporació municipal".

Segon; Sembla oportú doncs, tornar a fer un nou Conveni d'execució de Sentència. Un de plenament legal, just, i acceptat per les parts. Que posteriorment haurà de esser ratificat pel Ple de l'Ajuntament i en última instància, acceptat pel TSJC.

Tercer; Segons la sentència "177/2007 dictada en data 23 de febrero de 2007"; el Projecte de Reparcel·lació, aprovat el 8 de maig de l'any 2003, havia d'haver equidistribuit els beneficis i càrregues de la totalitat dels propietaris de la U.A. També els del Sr. Propietari de la parcel·la (0 de la illa B, del polígon cinquè del plànol parcel·lari de "Las Colinas), per estar físicament dins de la Unitat d'Actuació núm. 4 "Las Colinas". En resultar esser una parcel·la no edificable, en aplicació de l'article 133.12 "per afrontar amb una Carretera BV-2111". Carretera que ja existia abans de l'any 1992 (moment en el que es van aprovar definitivament les Normes Subsidiàries de Planejament).

Quart; El mateix Projecte de Reparcel·lació, ja preveia un import per a les indemnitzacions (per a la compensació de les pèrdues, o guanys, de m² entre les superfícies de les parcel·les aportades i les parcel·les resultants). Aquests import, que es va aprovar definitivament en el P.R., era un import de **14,24 €/m²**.

Cinquè; Per tant, la finca del Sr. Salvà, **de 848m²**, hauria d'haver estat objecte d'una compensació de **12.075,52€**, en el moment de la liquidació inicial de les quotes del PR, és a

dir, l'any 2003, com la resta de propietaris afectats. A canvi, la titularitat de la finca hauria d'haver passat al comú, com a finca sense aprofitament urbanístic, per ser inedificable i per tant sense aprofitament urbanístic.

Sisè; Ara, a febrer de 2019 (amb posterioritat amb l'última reunió entre les parts) aquells 12.075,52€ de l'any 2003, **hauran esdevingut 26.420,17€**, calculats a raó de **l'aplicació dels interessos corresponents** per a les anualitats (5,5% de l'any 2003 / 4,75% per l'any 2004 / 5% pels anys 2005 i 2006 / 6,25% per a l'any 2007 / 7% per a l'any 2008 i 2009 / 5% pels anys 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 / 4,375% per l'any 2015 / 3,75% pels anys 2016, 2017, 2018 i 2019).

Per tant, import ajustat a dret, de valoració de la compensació, en concepte de càrregues urbanístiques, que caldrà incloure en la futura liquidació definitiva del Projecte de Reparcel.lació de la Unitat d'Actuació núm. 4 "Las Colinas", fins a dia d'avui són 26.209,95€. Malgrat això, les parts podran acordar un altre import menor. Amb el benentès que aquest import és molt inferior al cost d'una nova tramitació (bé d'un nou Projecte de Reparcel.lació, bé de la modificació del actual PR) i això si, sempre i quan el TSJC no consideri el Contrari.

El que informo als efectes oportuns, segons el seu saber i entendre que sotmeto a qualsevol altra opinió més fonamentada.

Fecha	Importe
-------	---------

Liquidación de intereses

Desde	Hasta	Días	Capital Acumulado	% Intereses	Total Intereses
08-05-2003	31-12-2003	238	12.075,52	5.5	440,86
01-01-2004	31-12-2004	366	12.516,38	4.75	608,85
01-01-2005	31-12-2005	365	13.125,23	5	672,91
01-01-2006	31-12-2006	365	13.798,14	5	707,37
01-01-2007	31-12-2007	365	14.505,51	6.25	935,43
01-01-2008	31-12-2008	366	15.440,94	7	1.119,47



01-01-2009	31-03-2009	90	16.560,41	7	288,31
01-04-2009	31-12-2009	275	16.848,72	5	646,77
01-01-2010	31-12-2010	365	17.495,49	5	896,99
01-01-2011	31-12-2011	365	18.392,48	5	942,93
01-01-2012	31-12-2012	366	19.335,41	5	991,27
01-01-2013	31-12-2013	365	20.326,68	5	1.042,11
01-01-2014	31-12-2014	365	21.368,79	5	1.095,54
01-01-2015	31-12-2015	365	22.464,33	4.375	1.004,54
01-01-2016	31-12-2016	366	23.468,87	3.75	896,75
01-01-2017	31-12-2017	365	24.365,62	3.75	931,04
01-01-2018	31-12-2018	365	25.296,66	3.75	966,58
01-01-2019	27-02-2019	58	26.263,24	3.75	156,93»

3. El secretari-interventor municipal emet l'informe que es transcriu a continuació:

«INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ NÚM. 013/2019

Assumpte: Conveni urbanístic de gestió per a l'execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 177/2007, de 23 de febrer, sobre el projecte de reparcel·lació de la urbanització Las Colinas

Núm. expedient 1376-1479/2018

Ignacio Aragonés Seijo, Secretari-interventor de l'Ajuntament d'Olivella (Garraf), formulo el present informe:

Caràcter de l'informe: preceptiu, d'acord amb l'article 3.3.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Antecedents

1. La secció tercera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar la sentència número 177/2007, de 23 de febrer, en el recurs interposat pel senyor Joaquím Salvà i Garró contra el Decret d'alcaldia de l'Ajuntament d'Olivella de 8 de maig de 2003 sobre aprovació del projecte de reparcel·lació de la urbanització Las Colinas.

2. El 6 de febrer de 2009, l'alcalde de l'Ajuntament d'Olivella formalitza un conveni urbanístic amb el senyor Joaquím Salvà i Garró, per a l'execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 177/2007, de 23 de febrer, sobre el projecte de reparcel·lació de la urbanització Las Colinas.

Aquest conveni no consta als llibres d'actes del Ple municipal que hagi estat objecte d'aprovació.

3. El 13 de gener de 2017 es registra a l'Ajuntament (registre d'entrada núm. 162-1/2017) un escrit del senyor Joaquím Salvà i Garró en què exposa que el 6 de febrer de 2009 va formalitzar un conveni urbanístic avantdit, però que no ha estat executat. Per això en demana la resolució contractual.

4. El Decret d'alcaldia núm 98/2017, de 6 d'abril, acorda suspendre el termini per a resoldre la reclamació avantdita fins a la finalització de l'auditoria urbanística encarregada per l'Ajuntament.

5. El 24 de juliol de 2017, el senyor Joaquím Salvà i Garró interposa un recurs contenciós-administratiu contra el Decret d'alcaldia núm 98/2017, de 6 d'abril.

6. El 28 de juliol de 2017, el secretari judicial del jutjat contenciós-administratiu núm. 10 de Barcelona dicta un decret d'admissió a tràmit del recurs esmentat (procediment número 278/2017-V).

7. El Decret d'alcaldia número 273/2017, de 4 d'octubre, va resoldre la compareixença de l'Ajuntament en el recurs susdit.

8. El Decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 12863/2017, de 14 de desembre, atorga a l'Ajuntament l'assistència.

9. L'Ajuntament emplaça el recurs judicial al President de la Junta de compensació de la urbanització las Colinas, en liquidació. L'emplaçament es va notificar personalment pels agents municipals al President el dia 15 de gener de 2018.

10. El 2 de març de 2018 el jutjat contenciós-administratiu núm. 10 de Barcelona dicta la interlocutòria número 33/2018, en què declara caducat el recurs interposat.

11. Auditoria urbanística

En la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament tinguda el 27 de març de 2018, s'ha donat compte del resultat de l'auditoria urbanística, emès per Rousaud Costas Duran SLP el mes de desembre de 2017.

En compliment del que determina l'article 14.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya i l'article 14.2 del Decret



305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, el resultat de l'auditoria s'ha posat en coneixement general per mitjà d'un anunci publicat en el «Butlletí Oficial de la Província de Barcelona» de data 27-4-2018.

A l'apartat de l'expedient de gestió urbanística de la urbanització Las Colinas, a les pàgines 163 a 165, es tracta específicament la qüestió que ens ocupa en els termes següents:

«4. ANÀLISI D'ADEQUACIÓ URBANÍSTICA

El TSJC va dictar Sentència en data 23/02/2007, que és ferma, anul·lant l'acord municipal de 08/05/2003 d'aprovació definitiva del PR per infracció del principi de justa distribució de beneficis i càrregues atès que no es distribueix entre la comunitat reparcel·latòria la càrrega que per a les finques resultant que confronten amb les carreteres BV-2111 i BV-2212 suposa la seva afecció a les servituds de la legislació de carreteres i que comporta que no es puguin edificar. Per tant, és evident que en aquest extrem el PR no és conforme a Dret.

El compliment de la Sentència no ha de passar necessàriament per la tramitació d'un nou PR, a no ser que el TSJC consideri el contrari, i aquest compliment de la Sentència podria consistir en preveure via modificació del PR, via liquidació definitiva de la reparcel·lació (cal tenir present que aquesta liquidació definitiva requereix que la urbanització estigui acabada i recepcionada per l'Ajuntament) o via conveni d'execució de la Sentència la corresponent indemnització substitutòria d'edificabilitat a l'actora (cal tenir present que els pronunciaments de la Sentència també afecten a aquells propietaris que es trobin en la mateixa situació encara que no hagin interposat recurs contenciós-administratiu) i amb el benentès que la potestat per declarar que la Sentència s'ha executat correspon al TSJC.

L'Alcaldia i la part actora van formalitzar en data 06/02/2009 Conveni d'execució de Sentència, en virtut del qual i en el marc de redacció del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) l'Ajuntament es compromet a aprovar alguna de les alternatives següents:

- a) Que la parcel·la de la recurrent no estigui afectada per limitacions de la legislació de carreteres.
- b) Fer una proposta urbanística que permeti la justa distribució de beneficis i càrregues en relació a la parcel·la del recurrent.

En el referit Conveni d'execució de Sentència, l'Ajuntament es compromet a permutar una parcel·la del municipi per la finca del recurrent, d'anàlogues característiques i que permeti la justa distribució de beneficis i càrregues, en el cas que aquelles alternatives no siguin aprovades definitivament en el marc de POUM o bé no siguin possibles o bé si transcorren 2 anys des de la data del Conveni.

En el mateix Conveni es preveu que l'actora tindrà per executada la Sentència una vegada es materialitzin eficaçment alguna de les dues alternatives esmentades, que qualsevol part queda facultada per presentar al TSJC el Conveni als efectes de considerar suspensivament executada la Sentència (en data 10/02/2009 es va presentar al TSJC el Conveni) i que una vegada materialitzada la solució que correspongui es podrà presentar al TSJC l'execució definitiva de la Sentència. L'eficàcia del Conveni queda condicionada a la seva aprovació definitiva pel Ple de l'Ajuntament, tal com preveu en el mateix, i no consta que hagi estat aprovat, per la qual cosa no és eficaç.



En qualsevol cas, cal tenir present que l'execució de la Sentència via convencional requereix que tal opció sigui validada pel TSJC i això encara no ha succeït atès que el Conveni no ha estat aprovat pel Ple de l'Ajuntament (no és eficaç), no s'han materialitzat les alternatives proposades en el Conveni ni tampoc s'ha formalitzat la permuta amb caràcter subsidiari. A més a més, no procedeix l'alternativa que proposa el Conveni consistent en què la parcel·la de la recurrent no estigui afectada per limitacions de la legislació de carreteres (l'Ajuntament no té competències per modificar aquesta legislació) ni tampoc la permuta subsidiària que proposa el repetit Conveni atès que la càrrega que comporta la inedificabilitat de la finca del recurrent per les limitacions de la legislació de carreteres ha de ser assumida per la comunitat reparcel·latòria (els propietaris adjudicatari de finques amb aprofitament urbanístic) i no pas per l'Ajuntament, per la qual cosa el Conveni es considera que no s'ajusta a l'ordenament urbanístic i que no pot ser ratificat pel Plenari de la Corporació municipal.

D'altra banda, d'acord amb la Disposició Transitòria Vuitena de la LUC, el PR, en els seus aspectes formals i substantius, es regeix per la LUC atès que es va aprovar inicialment després de la seva entrada en vigor. Per tant, les finques incloses en la Unitat d'Actuació nº 4 Las Colinas tenen la condició de sòl urbà no consolidat (art. 31 de la LUC), però no hi ha l'obligació de cessió gratuïta del 10% de l'aprofitament, doncs en l'article 43.1 de la LUC només es preveu aquesta obligació de cessió del 10% de l'aprofitament sobre els nous usos o sobre l'edificabilitat addicional i no és el cas. Per altra part, en el PR es recullen les cessions dels sistemes urbanístics previstos en el planejament a favor de l'Ajuntament.

[...]

5. CONCLUSIONS

5.2 AL CONTINGUT

[...]

En relació al PR

El Conveni d'execució de la Sentència de 6/02/2009 entre l'Alcaldia i la part recurrent no és eficaç per no haver estat aprovat pel Ple de l'Ajuntament.

El Conveni d'execució de la Sentència de 6/02/2009 no es considera ajustat a Dret en els extrems que preveu com a una de les dues alternatives que la parcel·la de la recurrent no estigui afectada per limitacions de la legislació de carreteres (l'Ajuntament no té competències per modificar aquesta legislació) i en l'extrem que preveu amb caràcter subsidiari la formalització d'una permuta de finques entre l'Ajuntament i la actora (la càrrega que comporta la inedificabilitat de la finca de la recurrent ha de ser assumida per la comunitat reparcel·latòria i no per l'Ajuntament).

6. RECOMANACIONS

En relació al PR

Es recomana reformular de mutu acord amb l'actora el Conveni d'execució de la Sentència de 23/02/2009, eliminant l'alternativa que parcel·la de la recurrent no estigui afectada per limitacions de la legislació de carreteres, així com la previsió subsidiària de permuta i canviar-la per una indemnització substitutòria d'edificabilitat, fent constar que la mateixa és a càrrec de la comunitat reparcel·latòria, aprovar el nou Conveni pel Ple de l'Ajuntament i sol·licitar al TSJC l'homologació als efectes de tenir per executada la Sentència».



12. El 13 de novembre de 2018 es registra a l'Ajuntament (registre d'entrada núm. E/4461-2018) un escrit del senyor Joaquím Salvà i Garró en què exposa que el 6 de febrer de 2009 va formalitzar un conveni urbanístic avantdit, però que no ha estat aprovat pel Ple municipal. Per això en demana la seva aprovació, o en cas que no sigui aprovat s'apliqui la clàusula quarta del conveni susdit.

13. El dia 1 de març de 2019 l'arquitecte municipal emet sobre la situació d'aquest expedient, la finca afectada i la valoració de la indemnització que es desprèn del projecte de reparcel·lació

Fonaments de dret

1. Normativa aplicable

1.1. L'article 103 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, relatiu a l'execució de les sentències, estableix que:

«1. La potestat de fer executar les sentències i altres resolucions judicials correspon exclusivament als jutjats i els tribunals d'aquest ordre jurisdiccional, i el seu exercici és competència del qui hagi conegut de l'afer en primera o única instància.

2. Les parts estan obligades a complir les sentències en la forma i els termes que s'hi consignin.

3. Totes les persones i les entitats públiques i privades estan obligades a prestar la col·laboració que els requereixin els jutges i els tribunals contenciosos administratius per a l'execució deguda i completa del que s'ha resolt.

4. Són nuls de ple dret els actes i les disposicions contraris als pronunciaments de les sentències, que es dictin amb la finalitat d'eludir-ne el compliment.

5. L'òrgan jurisdiccional a qui correspongui l'execució de la sentència ha de declarar, a instància d'una de les parts, la nul·litat dels actes i les disposicions a què es refereix l'apartat anterior, pels tràmits que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 109, llevat que no tinguin competència per fer-ho d'acord amb el que disposa aquesta Llei».

1.2. Sobre la possibilitat de convenir l'execució d'una sentència, prèviament a la seva homologació judicial, és d'aplicació l'article 113 i l'article 77.3 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, en relació amb l'article 19 de Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, aplicable supletòriament a la Llei 29/1998 en virtut de la disposició final primera.

1.3. L'article 9.8 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana estableix que:

«Els convenis o negocis jurídics que el promotor de l'actuació formalitzi amb l'Administració corresponent no poden establir obligacions o prestacions addicionals ni més costoses que les que siguin procedents legalment, en perjudici dels propietaris afectats. La clàusula que contravingui aquestes regles és nul·la de ple dret».

L'article 25.1 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, sobre la publicitat i l'eficàcia en la gestió pública urbanística disposa que:

«Tots els instruments d'ordenació territorial i d'ordenació i execució urbanístiques, inclosos els de distribució de beneficis i càrregues, així com els convenis que amb aquest objecte s'hagin de subscriure per l'Administració competent, s'han de sotmetre



al tràmit d'informació pública en els termes i en el termini que estableixi la legislació en la matèria, que no pot ser mai inferior al mínim que exigeix la legislació sobre procediment administratiu comú, i s'han de publicar en la forma i amb el contingut que determinin les lleis».

1.4. L'article 70.ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb els convenis, preveu que:

«1. Les administracions públiques amb competències d'ordenació territorial i urbanística han de tenir a disposició dels ciutadans o ciutadanes que ho sol·licitin còpies completes dels instruments d'ordenació territorial i urbanística vigents en el seu àmbit territorial, dels documents de gestió i dels convenis urbanístics.

2. Les administracions públiques amb competències en la matèria publiquen per mitjans telemàtics el contingut actualitzat dels instruments d'ordenació territorial i urbanística en vigor, de l'anunci de la seva submissió a informació pública i de qualssevol actes de tramitació que siguin rellevants per a la seva aprovació o alteració.

En els municipis de menys de 5.000 habitants, aquesta publicació es pot fer a través dels ens supramunicipals que tinguin atribuïda la funció d'assistència i cooperació tècnica amb ells, que els han de prestar la cooperació esmentada.

3. Quan una alteració de l'ordenació urbanística, que no s'efectuï en el marc d'un exercici ple de la potestat d'ordenació, incrementi l'edificabilitat o la densitat o modifiqui els usos del sòl, s'ha de fer constar en l'expedient la identitat de tots els propietaris o titulars d'altres drets reals sobre les finques afectades durant els cinc anys anteriors a la seva iniciació, segons que consti en el registre o instrument utilitzat als efectes de notificacions als interessats de conformitat amb la legislació en la matèria».

1.5. L'article 104 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en relació amb la publicitat i les obligacions dels convenis urbanístics, disposa que:

«1. Els convenis urbanístics han d'integrar la documentació del planejament o de l'instrument de gestió al qual es refereixen, s'han de sotmetre a la informació pública corresponent i poden ésser objecte de consulta un cop aprovats.

2. Les administracions públiques amb competències urbanístiques i les entitats urbanístiques especials han de garantir la consulta presencial i per mitjans telemàtics dels convenis urbanístics que subscriuen i n'han de trametre una còpia al Departament de Política Territorial i Obres Públiques en el termini d'un mes des de llur aprovació, perquè siguin inserits en la secció de convenis urbanístics de l'instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de l'Administració de la Generalitat. En els municipis de menys de cinc mil habitants que no disposen dels mitjans tècnics necessaris, l'accés telemàtic al contingut dels convenis urbanístics es pot fer mitjançant la connexió amb l'instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de l'Administració de la Generalitat.

3. Els convenis urbanístics han d'especificar en una clàusula les obligacions de publicitat a què estan sotmesos per al coneixement de les parts signatàries.

4. Els convenis urbanístics obliguen exclusivament les parts que els han signat, i en cap cas no condicionen les competències públiques en matèria de planejament urbanístic, les quals no poden ésser objecte de transacció, i no poden comportar per a les persones propietàries obligacions o càrregues addicionals o més costoses que les establertes per la legislació aplicable».

1.6. El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme preveu, en relació amb els convenis urbanístics preveu que:

«Article 25
Disposicions generals

25.1 Els convenis urbanístics tenen naturalesa jurídicoadministrativa i les qüestions relatives a llur compliment, interpretació, efectes i extinció són competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

25.2 L'aprovació, formalització i execució dels convenis urbanístics se subjecta a la normativa reguladora de les entitats públiques que els subscriuguin.

25.3 Els convenis urbanístics es perfeccionen i obliguen exclusivament a les parts, d'acord amb llur contingut, des de llur aprovació per l'òrgan competent de l'administració o entitat pública que els subscriu.

Article 26
Publicitat dels convenis urbanístics

26.1 L'acord d'aprovació dels convenis urbanístics ha de ser publicat al butlletí o diari oficial corresponent dins del mes següent a llur aprovació.

26.2 Les entitats públiques que subscriuguin convenis urbanístics han de garantir llur consulta pública i han de facilitar-ne còpies a qui les sol·liciti.

26.3 Els convenis urbanístics que es refereixin a instruments de planejament o gestió que han de ser objecte d'aprovació, modificació o revisió, han de formar part de la documentació que integra la respectiva figura de planejament o gestió des de l'inici del procediment corresponent o des de la seva formalització, si aquesta es produeix un cop iniciat el procediment. En el cas que la formalització del conveni tingui lloc després de l'aprovació inicial de l'instrument de planejament o gestió, el conveni s'ha de sotmetre a informació pública, bé sigui conjuntament amb l'instrument de què es tracti, si d'acord amb l'article 112 d'aquest Reglament procedeix subjectar-lo a un nou tràmit d'informació pública, bé sigui amb un tràmit específic d'informació pública per un termini d'un mes, i s'ha d'incorporar a l'instrument de planejament o de gestió que sigui objecte del següent acord d'aprovació que correspongui».

1.7 Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, regulen en règim jurídic aplicable als convenis.

1.8. Els articles 82 i 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), sobre el tràmit d'audiència i informació pública, respectivament.

També és d'aplicació general l'article 86 LPACAP sobre la terminació convencional.

2. Adequació del conveni urbanístic transaccional

Com es desprèn dels antecedents de l'expedient objecte d'aquest informe es pretén subscriure un conveni urbanístic, que pot encabir-se en la categoria de conveni de gestió urbanística perquè la seva naturalesa es relaciona amb un projecte de reparcel·lació, als efectes d'executar una sentència judicial.



És a dir, el convenis de gestió, d'espectre més ampli, s'acorden per a la gestió o execució d'una planejament ja aprovat en base al principi de participació dels particulars en la fase d'execució urbanística, amb l'objecte d'agilitar les tasques pròpies d'aquest procés (vegeu l'estudi de GIFREU FONT, J., «L'ordenació urbanística a Catalunya», Associació Catalana de Municipis i Comarques-Marcial Pons, 2012, pàgina 571). A diferència del que succeeix amb els convenis de planejament, els de gestió són acceptats per la jurisprudència sense majors dificultats, sempre que s'adaptin als límits fixats legalment. En aquest sentit, entre altres, es pot esmentar una sentència dictada pel Tribunal Suprem (sala contenciosa administrativa, secció primera, 15 de febrer de 1994, Roj: STS 15427/1994, fonament de dret tercer), que considera que aquesta tipologia convenial:

«entra de lleno en el terreno de la práctica urbanística que tiende a complementar las determinaciones legales en la materia, posibilitando el acuerdo de las partes afectadas, contribuyendo a facilitar la gestión, eliminando ab initio los puntos de fricción y los obstáculos que una determinada actuación urbanística pueda originar; y sin que sea dable atribuir a los mismos la constitución de un sistema de ejecución del planeamiento, sin que puedan sustituir en ningún caso el sistema en cada caso elegido; de esta forma el convenio viene a ser un instrumento facilitador de la actuación urbanística que en modo alguno pueden implicar derogación ni un beneficio de la Administración ni en favor de los particulares, de las reglamentaciones de carácter imperativo, ni puede condicionar el ejercicio de las potestades urbanísticas, por ser el urbanismo una auténtica función pública indisponible e irrenunciable».

Així mateix, es pot indicar una sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (sala contenciosa administrativa, secció tercera, de 4 de maig de 2006) en la qual en referir-se als convenis urbanístics com a negocis jurídics atípics no previstos per l'ordenament jurídic urbanístic, formalitzats entre Administracions amb competències urbanístiques i subjectes privats, s'afirma el següent:

«Tienen su finalidad puesta sustancialmente en incidir en el Ordenamiento jurídico urbanístico, así en la vía de planeamiento o/y en la vía de la gestión urbanística, o/y en la vía de la intervención administrativa, o/y en cualquier otro ámbito urbanístico, sin descartar la posible incorporación de otros supuestos de naturaleza diferenciada que no empañan la sustancial naturaleza urbanística del caso, así para perspectivas medioambientales, licencias de actividades o de otros cualesquiera supuestos».

El conveni urbanístic en el cas que ens ocupa es limita estrictament a executar una sentència judicial.

Val a dir, a més, que l'ordenament administratiu consagra com un dels seus principis el relatiu al principi de conservació dels actes administratius, que es tradueix en determinats límits a l'extensió de la nul·litat o anul·labilitat dels actes (article 49 LPACAP) així com la conservació d'actes i tràmits (article 51 LPACAP). Altrament dit, no és raonable procedir a la tramitació d'un nou projecte de reparcel·lació per tal d'executar jurídicament una situació individualitzada d'una nul·litat que pot ésser vehiculada mitjançant una indemnització substitutòria perquè no afecta a la totalitat de l'acte, com apunta l'auditoria urbanística i l'informe de l'arquitecte municipal, argumentació a la qual com a secretari-interventor també subscriu tècnicament.

A l'últim, el conveni que s'aprovi s'ha de trametre a l'òrgan judicial que ha dictat la sentència als efectes que en validi la seva adequació amb l'execució total d'allò decidit.



3. Contingut econòmic del conveni: participació de l'administració actuant i els subjectes propietaris en la modalitat de cooperació del sistema d'actuació urbanística

Aquest conveni preveu l'abonament a la persona interessada i demandant en seu judicial contra el projecte de reparcel·lació, de la valoració de la compensació, en concepte de càrregues urbanístiques, que caldrà incloure en la futura liquidació definitiva del Projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació núm. 4 «Las Colinas». L'informe de l'arquitecte realitza un càlcul de l'import indemnitzable d'acord amb allò establert pel projecte de reparcel·lació de la unitat propdita, que suma 26.209,95€.

Com encertadament expressa l'informe les parts poden convenir una indemnització per un altre import menor en exercici del principi de llibertat de pactes en els convenis, establert a l'article 86.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sempre que «no siguin contraris a l'ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l'interès públic que tenen encomanat, amb l'abast, els efectes i el règim jurídic específic que, si s'escau, prevegi la disposició que ho reguli».

Cal insistir, com diu l'informe de l'arquitecte, que l'import resultant de l'execució de la sentència esmentada és molt inferior al cost d'una nova tramitació (bé d'un nou projecte de reparcel·lació, bé de la modificació de l'actual projecte).

Per acabar aquest punt, per bé que el sistema d'actuació urbanística aplicable a la unitat d'actuació núm. 4 correspon a la modalitat de cooperació, l'Administració executa però les despeses són a càrrec de les persones propietàries (article 139.1 Decret legislatiu 1/2010, de 3 agost), i així mateix, les persones propietàries aporten les seves finques a la reparcel·lació i participen en el pagament de les despeses d'urbanització en proporció als seus drets en la comunitat de reparcel·lació (article 180.2 del Decret 305/2006). En aquesta qüestió val a dir que encara ara subsisteix la Junta de compensació de la urbanització de «Las Colinas», en liquidació, i per això cal considerar-la part interessada en aquest procediment administratiu i amb la qual s'hauria d'exigir prèviament a la liquidació definitiva de la seva comesa que se'n faci càrrec de l'import resultant de l'execució de la sentència.

4. Òrgan competent per a l'adopció d'aquest acord

L'atribució per a dictar aquest acord correspon al Ple d'acord amb l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol dels instruments d'ordenació que preveu la legislació urbanística.

CONCLUSIONS

Informo favorablement la subscripció del conveni urbanístic de gestió per a l'execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 177/2007, de 23 de febrer, sobre el projecte de reparcel·lació de la urbanització Las Colinas.

No obstant la corporació decidirà allò que consideri oportú».

ACORD:

Primer. APROVAR INICIALMENT el conveni urbanístic de gestió per a l'execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 177/2007, de 23 de febrer, sobre el projecte de reparcel·lació de la urbanització Las Colinas, el text del qual s'insereix a l'annex d'aquest acord.



Segon. OBRIR un període d'informació pública per un termini de d'un mes, a comptar de la publicació de l'anunci d'exposició en el «Butlletí Oficial de la Província de Barcelona» i en el tauler d'edictes electrònic de la corporació.

Tercer. ATORGAR simultàniament el tràmit d'audiència a la persones interessades, el senyor Joaquim Salvà i Garró i la Junta de compensació de la urbanització de «Las Colinas», en liquidació.

Quart. DECLARAR el règim de recursos aplicable:

Aquesta acord no pot impugnar-se, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat. No obstant, els interessats poden efectuar les al·legacions que estimin convenientes, per tal que puguin ser considerades en l'acord que posi fi al procediment.

ANNEX

Conveni urbanístic de gestió per a l'execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 177/2007, de 23 de febrer, sobre el projecte de reparcel·lació de la urbanització Las Colinas

REUNITS

[dades persones compareixents: alcaldessa, Joaquím Salvà i Garró, i secretari/ària-interventor/a municipal als efectes de fe pública]

Ambdues parts es reconeixen capacitat jurídica, d'obrar i competència, en la representació amb la que intervenen, per signar el present conveni urbanístic de gestió.

MANIFESTEN

1. El senyor JOAQUIM SALVA I GARRÓ és propietari d'una parcel·la a la Urbanització de las Colinas del municipi d'Olivella. L'esmentada finca té les dades registrals i els límits següents:

«URBANA.- PORCIÓN DE TERRENO situado en el término municipal d'Olivella, constituida por la parcela O de la isla B, del polígono quinto del plano parcelario de la urbanización de la mayor finca de que se segregó, denominada "Las Colinas". Tiene una superficie de ochocientos cuarenta y ocho metros y sesenta cuatro décimetros cuadrados (848,64 m2) equivalentes a 22.461,80 palmos cuadrados.

LINDA.- Por su frente, Noreste, en línea de 34 metros, con la carretera de Sant Pere de Ribes a la de Barcelona a Tarragona; por la derecha entrando, Noroeste, en línea de 27,50 metros, con la parcela número 1; por la izquierda, Sureste, en línea de 23,40 metros, con la parcela número 28; y al fondo, Suroeste, en línea de 34 metros, con la parcela número 23.

INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Vilanova i la Geltrú, tomo 408, libro 12, folio 77, finca 732.

REFERENCIA CATASTRAL: 7443617 CF9774S-0001/BB».

2. L'Ajuntament d'Olivella, mitjançant el Decret de l'Alcaldia número 43/2003, de 8 de maig, va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació de la Urbanització Las Colinas.

La descripció en el el projecte de reparcel·lació de la finca propietat del senyor Salvà és la següent:

«Urbana Pieza de tierra de forma rectangular. Derivada de Plan Parcial con uso residencial y con una superficie de 848,64 m2.

Limita al norte con carretera BV-2415 de la manzana B, del polígono quinto; al Sur parte con parcela número 23 y parte con parcela número 26 ambas de la manzana B, del polígono quinto; al Este, con parcela número 28 de la manzana B, del polígono quinto; y al Oeste con parcela número 1 de la manzana B, del polígono quinto.

Tiene como referencia catastral el núm. 7443617CF9774S- 0001/BB.

Pendiente de inscripción.

Cargas: Afecta al pago de los costes de urbanización».

3. Contra l'aprovació definitiva del projecte avantdit, el senyor Salvà interposà recurs de reposició, i contra la desestimació pressupte del recurs, un recurs judicial.

4. La secció tercera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar la sentència número 177/2007, de 23 de febrer, en el recurs interposat pel senyor Joaquím Salvà i Garró contra el Decret d'alcaldia de l'Ajuntament d'Olivella de 8 de maig de 2003 sobre aprovació del projecte de reparcel·lació de la urbanització Las Colinas.

La decisió de la sentència es transcriu a continuació:

«Primero. Estimar parcialmente el recurso interpuesto por Don Tomás contra la desestimación por acto presunto del recurso de reposición formulado contra el decreto dictado el 8 de mayo de 2003 por el Alcalde de Olivella, que se anula, desestimando las demás pretensiones.

Segundo. No efectuar pronunciamiento impositivo de las costas procesales devengadas en la substanciación del presente recurso».

5. El 6 de febrer de 2009, l'alcalde de l'Ajuntament d'Olivella formalitza un conveni urbanístic amb el senyor Joaquím Salvà i Garró, per a l'execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 177/2007, de 23 de febrer, sobre el projecte de reparcel·lació de la urbanització Las Colinas.

Aquest conveni no consta als llibres d'actes del Ple municipal que hagi estat objecte d'aprovació.

6. El 13 de gener de 2017 es registra a l'Ajuntament (registre d'entrada núm. 162-1/2017) un escrit del senyor Joaquím Salvà i Garró en què exposa que el 6 de febrer de 2009 va formalitzar un conveni urbanístic avantdit, però que no ha estat executat. Per això en demana la resolució contractual.

7. El Ple municipal, en la sessió extraordinària tinguda el dia 2 d'abril de 2019, ha aprovat la minuta d'aquest conveni.

Per tot això, subscriuen aquest conveni urbanístic de gestió, que es regeix pels següents

P A C T E S

1. Objecte

Aquest conveni té per objecte l'execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 177/2007, de 23 de febrer, sobre el projecte de reparcel·lació de la

urbanització Las Colinas i la regulació de la tramitació de la indemnització substitutòria d'edificabilitat, a càrrec de de les persones propietàries en proporció als seus drets en la comunitat de reparcel·lació.

2. Obligacions de les parts

2.1 Actuacions de l'Ajuntament

2.1.1 L'Ajuntament d'Olivella, com Administració que actua en el sistema d'actuació urbanística aplicable a la unitat d'actuació núm. 4 en la modalitat de cooperació, i en, al senyor Joaquim Salvà i Garró amb la quantitat de 18.000,00 Euros (divuit mil euros).

2.2.2 Així mateix, l'Ajuntament s'obliga a tramitar la validació d'aquest conveni davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes d'execució total i definitiva de sentència esmentada així com la inscripció en el registre de la propietat i en el cadastre del canvi de titularitat de la finca.

2. Actuacions del senyor Joaquim Salvà i Garró

El senyor Joaquim Salvà i Garró accepta les determinacions expressades a l'apartat anterior i entèn per executada la sentència a què s'ha fet referència, un cop es materialitzi eficaçment la indemnització adoptada en el present conveni.

3. Abonament de la indemnització

Correspon a la Junta de compensació de la urbanització de «Las Colinas», en liquidació, fer front a la despesa a càrrec de les persones propietàries.

El pagament s'ha de materialitzar en el termini d'un mes a comptar de la notificació de l'aprovació definitiva d'aquest conveni pel Ple de l'Ajuntament d'Olivella, per mitjà de transferència bancària al compte bancari que indiqui a l'Ajuntament el senyor Salvà.

4. Règim de modificacions del conveni

La modificació d'aquest conveni s'ha de realitzar mitjançant addenda i per acord unànime de les parts, prèvia ratificació del Ple municipal.

5. Incompliment del conveni

En cas d'incompliment de les obligacions i compromisos assumits, les parts es reserven el dret d'exercir les accions legals necessàries per exigir el compliment dels pactes o a instar la seva resolució.

6. Formes d'extinció del conveni

Són formes d'extinció del conveni:

- a. La realització de l'objecte del conveni.
- b. El mutu acord de les parts.
- c. L'incompliment de les obligacions establertes en el conveni per qualsevol de les parts.
- d. La impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.
- e. Per qualsevol de les causes previstes en el marc normatiu vigent.

7. Jurisdicció competent

El present conveni té naturalesa administrativa. Els conflictes derivats de l'aplicació d'aquest conveni són competència dels òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la província de Barcelona.

8. Publicitat del conveni

L'acord d'aprovació dels convenis urbanístics ha de ser publicat en el «Butlletí Oficial de la Província de Barcelona», en el portal de transparència municipal i també en l'expedient el projecte de reparcel·lació, als efectes del compliment de les obligacions de publicitat activa legalment previstes.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les persones que l'atorguen signen el present conveni, per duplicat.

[data de formalització]

[noms i rúbriques]